

LA COYUNTURA CHIAPANECA

GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 14 DE MAYO DE 1996

El Gobierno de Ernesto Zedillo ha perdido la capacidad de hegemonía y creación de consenso para implementar el proyecto neoliberal que ya ha causado cierre masivo de empresas con un aumento del desempleo cada vez más dramático. Grandes sectores de la sociedad se han manifestado contra las consecuencias de este proyecto. Ya nadie cree. Ante esta situación, el peligro de querer lograr el proyecto por la vía de la coerción se va imponiendo.

El Diálogo de San Andrés entre el EZLN y el Gobierno Federal marca el hilo conductor de la contradicción principal en el Estado. La sentencia de Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin ponen en riesgo una vez más el proceso del diálogo aunado al enfrentamiento entre perredistas y priistas -llamados 'Chinchulines'- en la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón, en los últimos días.

El Gobierno de Transición encabezado por Amado Avendaño, quien fuera la alternativa social y campesina aglutinadora y canalizadora de los descontentos campesinos e indígenas, así como el posible actor de mediación ante el Estado, ha perdido su fuerza. Es hoy un fantasma y busca plegarse cada vez más a las decisiones de los zapatistas.

Por otro lado, la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH) que aglutina a las organizaciones campesinas del estado, ha sufrido una muerte política y social. El gobierno estatal logró que dicha organización firmara el llamado finiquito agrario donde aceptaba que, con el reparto de tierras acordado, se soluciona el problema de la demanda de la tierra, lo que justifica por la vía legal los desalojos. Ante esto, la AEDPCH expulsa y suspende a líderes de su consejo directivo por haber firmado dicho acuerdo lo que provocó una fuerte ruptura al interior de la organización. Cabe mencionar que uno de los dirigentes es actualmente presidente del PRD estatal, por lo que dicho partido, ya de por sí fraccionado y dividido, queda más entredicho para las organizaciones campesinas.

Por si fuera poco, la AEDPCH acordó con el gobierno estatal llevar a cabo un proceso de diálogo con la instalación de varias mesas de negociación. Ello ha provocado fricciones con el EZLN por llevar un proceso paralelo a la mesa de San Andrés.

Ante la falta de un eje aglutinador de las fuerzas campesinas independientes y democráticas, de una salida política confiable para ellos ante sus demandas, la tensión entre la lógica militar y la lógica civil aumenta dándose un desplazamiento y recomposición de las bases campesinas e indígenas que va desde sus organizaciones independientes y desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hacia un

acercamiento mayor a las filas del EZLN, lo que lo aumenta en número y regiones en el estado.

Por su lado, el Ejército Federal ha aumentado la militarización en todo el estado. Su presencia en las comunidades por medio de las intimidaciones y hostigamiento va causando cada vez más cansancio entre la población campesina e indígena. Su filtración se ha dado en todos los ámbitos: militarización de las instituciones públicas -que implica la presencia de médicos, agentes migratorios, etc., en las diversas dependencias del estado-, tomando como pretexto el narcotráfico y una supuesta labor social en las comunidades. Por si fuera poco, el Ejército Mexicano continúa con el fortalecimiento de su armamento, como ha sido notificado últimamente por la prensa nacional sobre los embarques en el puerto de Veracruz de tanquetas y equipo bélico traído de Bélgica.

El Ejército Federal ha fortalecido el entrenamiento y dotación de armas por medio de la creación de grupos paramilitares usando las bases priístas y sus organizaciones a fines y controladas por el gobierno, como es el caso de la ARIC oficial.

Por ello, los enfrentamientos armados se dan públicamente entre simpatizantes perredistas y organizaciones campesinas simpatizantes del EZLN, contra priístas y sus organizaciones campesinas a propósito de la invasión de tierras o conflictos poselectorales que provocan detonaciones de enfrentamientos armados.

Por su lado, el gobierno del estado refuerza su estrategia de baja intensidad bajo la modalidad de ofrecer a las organizaciones campesinas productivas fuertes financiamientos en un momento crítico para ellas. Sin embargo, todavía permanece en el ambiente la sensibilidad política de las organizaciones de que cualquier trato o concertación con el gobierno implica venderse, corporativizarse o dejarse controlar por el estado, ante la última experiencia vivida por la AEDPCH con la firma del finiquito agrario. Cualquier acción con el gobierno conlleva desconfianza entre las organizaciones campesinas y roces con el EZLN.

En el campo de las Organizaciones No Gubernamentales, el gobierno del estado lleva un proyecto de control y cooptación de estos organismos que se han aglutinado en el llamado Frente Estatal de ONG's ofreciéndoles financiamiento del Banco Mundial para la ejecución de proyectos en la llamada zona de conflicto. Ello provocará divisiones en las comunidades campesinas y contradicciones con las Ong's que históricamente han apoyado la región.

Al interior del gobierno estatal se presentan contradicciones internas entre el gobernador interino, Ruiz Ferro, y el secretario de gobernación, Eraclio Zepeda, donde el problema se ha manifestado por medio del conflicto entre la organización estatal de transportistas y la Unión Nacional Lombardista (UNAL) que lidera Eraclio Zepeda.

Por otro lado, las comunidades en la llamada zona de conflicto así como en otras regiones, van implementando por la vía de los hechos las llamadas regiones autónomas

y municipios rebeldes con estructura y fuerza propia, independientemente de los ayuntamientos que van siendo rebasados por esta dinámica. Junto a este proceso, se va fortaleciendo otra dinámica de las comunidades campesinas e indígenas en varios puntos del estado con la llamada 'resistencia civil', que implica el no pago de los servicios públicos, principalmente la luz eléctrica, e impuesto predial.

Lo anterior le implica al estado un mayor déficit presupuestal por lo que lleva a cabo una campaña fiscal con el fin de cobrar las deudas históricas de empresas mayores, como lo son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (TELMEX), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Banca, etc.

El proceso de negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal está colgada de un hilo. Si bien el asunto de Elorriaga y Entzin ha provocado reacciones diversas y se ha interpretado como una provocación, el conflicto podría estallar por otros canales.

Concluimos con que la guerra existe. Hay una guerra de baja intensidad, pero también hay una guerra entre las partes que se manifiesta por medio de otros canales de salida: las organizaciones campesinas y partidos políticos opuestos bajo las contradicciones secundarias de los conflictos postelectorales, tomas de tierras y narcotráfico. Lo anterior puede llevar a más enfrentamientos armados que pongan en entredicho continuamente la mesa del diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal, o sirvan de escape para que éste proceso no se rompa.